

*Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C.A.*

DICTAMEN NÚMERO 08-2006

HONORABLE PLENO

Con fecha 23 de noviembre de 2006, el Pleno del Congreso de la República conoció la Iniciativa de Ley registrada con el número 3576, presentada por los representantes Guay Rivera Estrada, Pablo Manuel Duarte Sáenz de Tejada, Jorge Méndez Herbruger, Mariano Rayo y compañeros, la cual propone aprobar Reformas Legales a Distintas Leyes Tributarias.

ANTECEDENTES:

El Congreso de la República, como parte de la reforma integral a la legislación bancaria del país, emitió, entre otros, el Decreto Número 19-2002, que contiene la Ley de Bancos y Grupos Financieros, vigente a partir del 1 de junio de 2002, el cual contempla, entre varios temas, las operaciones que pueden realizar los bancos del sistema y de las empresas que conforman los grupos financieros.

Dentro de ese contexto, el tercer párrafo del artículo 27 del mismo cuerpo legal dispone, que los grupos financieros deben organizarse bajo el control común de una empresa controladora constituida en Guatemala, específicamente para este propósito, o de una empresa responsable del mismo grupo.

Sobre este particular, el artículo 32 de la citada ley establece que la empresa controladora deberá constituirse en forma de sociedad anónima con acciones nominativas, cuyo objeto social exclusivo será la dirección, administración, control y representación del grupo financiero. Agrega que la empresa controladora sólo podrá invertir en acciones de bancos, sociedades financieras, casas de cambio, almacenes generales de depósito, aseguradoras, afianzadoras, empresas especializadas en emisión y administración de tarjetas de crédito, empresas de arrendamiento financiero, empresas de factoraje, casas de bolsa, entidades fuera de plaza o entidades off shore, así como en empresas de apoyo al giro bancario, tal el caso de las dedicadas a la prestación de servicios de cajeros automáticos, procesamiento electrónico de datos y otras que califique la Junta Monetaria, no pudiendo realizar dicha empresa controladora operaciones que sean propias de las empresas enumeradas.



Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Con base en lo anterior, las empresas controladoras tendrían como giro exclusivo el control accionario de las empresas que conforman al grupo financiero, ya que la ley no les permite realizar ningún tipo de operaciones diferentes a dicho control. Asimismo, la constitución de una controladora no implica el incremento del capital del grupo financiero, en virtud de que se trata del canje de acciones.

En otro contexto, es oportuno comentar que una práctica común dentro de las operaciones financieras de los bancos es la compra-venta de cartera crediticia, las cuales son parte de las transacciones interbancarias, las que tienen como motivación la buena administración del negocio, la atención de necesidades temporales de liquidez o bien un mecanismo estratégico de gestión, que incluyen desde la venta de títulos-valores hasta la cesión de una parte sustancial de su balance; este último aspecto está contenido en el artículo 11 del Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República, Ley de Bancos y Grupos Financieros, para lo cual la Junta Monetaria, en cumplimiento de dicho artículo, emitió la normativa reglamentaria correspondiente.

Otro asunto importante considerado en el Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República, Ley de Bancos y Grupos Financieros, es el proceso de regularización, suspensión de operaciones y exclusión de activos y pasivos a que estarían sujetos los bancos que:

- a) Suspendan el pago de sus obligaciones;
- b) Tengan deficiencia patrimonial superior al cincuenta por ciento de su patrimonio requerido;
- c) No presenten, les sea rechazado definitivamente por parte de la Superintendencia de Bancos o incumplan el plan de regularización previsto en el artículo 73 de dicha ley; o,
- d) Por otras razones debidamente fundamentadas en informe del Superintendente de Bancos.

Dentro de dicho proceso, la Junta Monetaria deberá nombrar una Junta de Exclusión de Activos y Pasivos, que tendrá todas las facultades legales para actuar judicial y extrajudicialmente dentro del ámbito de las atribuciones que le señala la ley, ejecutando los actos y celebrando los contratos que sean del giro de sus atribuciones.



Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Por razones de interés social, dentro de dicho proceso, los derechos que incorporen las acciones de la entidad de que se trate quedan en suspenso y sus directores o administradores quedan separados de sus cargos. En ese sentido, dentro de las facultades de los miembros de la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos, está la de disponer la exclusión de los activos del balance de la entidad suspendida y la transmisión de estos a un fideicomiso administrado por una entidad bancaria.

El fideicomiso que constituya la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos tiene por objeto administrar y realizar los activos excluidos, lo cual servirá para cancelar los certificados de participación emitidos por éste, certificados que son entregados como contrapartida de un monto equivalente de los depósitos de los ahorrantes y de las prestaciones laborales de los trabajadores, obligaciones que son transferidas a otra u otras entidades bancarias, para que dichos depósitos sean puestos a disposición de los cuentahabientes del banco suspendido y las prestaciones canceladas a favor de los empleados.

Por otra parte, cabe comentar que la legislación tributaria guatemalteca, por ser anterior a la reforma financiera de 2002, no incentiva el adecuado desenvolvimiento de las figuras anteriormente comentadas; en ese sentido, no existe una apropiada integración entre las leyes tributarias y las financieras, lo cual tiene como consecuencia que dichas figuras no tengan la funcionalidad que el mercado financiero requiere, toda vez que, para el caso de las controladoras, pueden generar una doble tributación y, para el caso de la venta de cartera crediticia de los bancos y de las operaciones del fideicomiso conformado por la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos, hacen más complicada y onerosa su realización.

SITUACIÓN ACTUAL:

En la actualidad se encuentran autorizados por Junta Monetaria catorce grupos financieros, de los cuales trece están plenamente formalizados. Adicionalmente, se encuentran tres grupos en proceso de autorización. Al respecto, cabe mencionar que ninguno de los grupos financieros está organizado bajo el control de una empresa controladora, sino bajo la figura de una empresa responsable, la cual, según la legislación, debe ser una entidad bancaria.

Lo anterior obedece, principalmente, a aspectos de carácter tributario, toda vez que al existir una empresa controladora, distinta de las empresas que conforman su grupo, sería considerada por la Administración Tributaria como un sujeto de gravamen adicional, no obstante que es sólo un tenedor de las acciones de sus controladas.



Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

En el caso del impuesto extraordinario y temporal de apoyo a los acuerdos de paz se generaría un pago impositivo adicional, pues aparte del pago que normalmente deben realizar todas las empresas controladas sobre sus activos o ingresos, según corresponda, con la constitución de una empresa controladora los activos representados por las acciones adquiridas de las empresas controladas o los ingresos que generen, también estarían gravados con el impuesto mencionado.

Situación similar se presenta con el pago de dividendos afectos al impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos, en el que se debería cubrir dicho impuesto, primeramente, en los dividendos que perciba la controladora; y, seguidamente, al momento que dicha controladora pague dividendos a sus accionistas, con lo cual se genera un impuesto adicional, no obstante que tienen su origen en la misma renta.

Por aparte, como ya se indicó, la legislación vigente regula la cesión de una parte sustancial del balance de una entidad bancaria. Al respecto, cabe indicar que en el ámbito internacional es común observar que las entidades bancarias dentro del giro normal de sus operaciones realicen ventas parciales de su cartera crediticia. En algunos casos, dicha operación puede coadyuvar a una mejor gestión de riesgos, al transformar los activos crediticios en recursos líquidos o de equilibrar e incluso mejorar su posición patrimonial; sin embargo, en la práctica guatemalteca no es común que esta operación se realice, debido en gran medida, por estar gravada con el impuesto al valor agregado o el impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos.

Con relación a los fideicomisos a que se refiere el artículo 79, inciso b), del Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República, Ley de Bancos y Grupos Financieros, es del caso mencionar que aunque la transmisión de los activos excluidos al fideicomiso se encuentra exenta del pago del impuesto al valor agregado, no ocurre lo mismo al momento en que dicho fideicomiso procede a administrar y realizar los activos excluidos, toda vez que las rentas generadas por el mismo estarían afectas al impuesto sobre la renta y las ventas efectuadas estarían gravadas con el impuesto al valor agregado o el impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos. Dicha situación erosionaría el patrimonio fideicometido, en detrimento del interés público que se está tutelando, además que se desestimularía la pronta y beneficiosa realización de dichos bienes, lo cual obstaculiza el objetivo del citado fideicomiso.



Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

JUSTIFICACIÓN:

Por los aspectos enunciados con anterioridad, el mercado financiero necesita que la normativa tributaria se adecue a la normativa financiera, toda vez que dicho mercado coadyuva al desarrollo económico del país.

En este contexto, resulta importante motivar el esquema de empresa controladora toda vez que, además de ser el más aceptado en el ámbito internacional, favorece una mejor regulación y separa razonablemente las actividades emprendidas por las otras entidades integrantes del grupo financiero, que pueden afectar al banco o entidad financiera principal. En tal sentido, puede afirmarse que tiende a proteger al banco de los malos resultados de los otros negocios y que busca posibilitar que la máxima pérdida de éste, no supere el capital invertido.

Este esquema facilita la supervisión funcional y, al tratar de aislar al banco del efecto del resto de las operaciones del grupo, genera menos posibilidades para que éste intente apoyar a aquellas sociedades no bancarias denominadas controladas. No obstante, aunque existan restricciones legales que impidan compartir activos o factores, como infraestructura, empleados y otros, no puede descartarse que el banco, sobre todo, si tiene un peso relativo importante dentro del grupo, se mantenga indiferente ante la caída de una empresa coligada que pueda afectar la imagen del conglomerado.

Con base en lo anterior, es procedente que las empresas controladoras gocen de algunas exenciones de carácter tributario, considerando que su objeto está limitado únicamente a la tenencia de acciones de las empresas de su grupo financiero y que coadyuvan en la búsqueda de la optimización de los beneficios que implica la producción conjunta de servicios financieros, así como en la diversificación tendiente a minimizar el riesgo sistémico.

En lo que respecta a la compra-venta de cartera crediticia, en el ejercicio de sus operaciones, las entidades bancarias podrían experimentar algún problema temporal de liquidez o solvencia, el cual puede ser mitigado con la venta de una parte de su cartera crediticia. En ese sentido, esta operación debe ser motivada, con la exención del impuesto al valor agregado o de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos, en vista que dicha operación coadyuva a una mejor gestión de riesgos, al transformar sus activos crediticios en recursos líquidos o de equilibrar e incluso mejorar su posición patrimonial.



Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Por otra parte, en el caso de que se presente un problema que derive en la suspensión de las operaciones de una institución bancaria, y con el objeto de proteger el sistema de pagos, será necesario disponer de los mecanismos que hagan viable la oportuna y ágil realización de los activos excluidos hacia el fideicomiso a que se refiere el artículo 79, inciso b), del Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República, Ley de Bancos y Grupos Financieros, por lo que se justifica que estas operaciones sean contempladas dentro de las exenciones al impuesto sobre la renta, al impuesto al valor agregado, al impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos, al impuesto sobre productos financieros y al impuesto extraordinario y temporal de apoyo a los acuerdos de paz.

OPINIONES RECABADAS:

El presente proyecto de Reformas Legales a Distintas Leyes Tributarias reúne la opinión de las instituciones siguientes:

- Asociación Bancaria de Guatemala
- Ministerio de Finanzas Públicas
- Ministerio de Economía
- Superintendencia de Administración Tributaria
- Banco de Guatemala
- Superintendencia de Bancos

Cabe mencionar que se atendieron las distintas opiniones y ponencias y se incluyeron en el proyecto aquellas que, por consenso, se consideraron necesarias y aplicables, según las circunstancias.

ANÁLISIS DE LA COMISIÓN:

La iniciativa de ley tiene por objeto incluir dentro de las exenciones tributarias las operaciones que realicen las empresas controladoras de grupos financieros, la compra-venta de cartera crediticia a bancos y sociedades financieras, entre empresas que no formen parte del mismo grupo financiero, y las operaciones que realicen los fideicomisos a que se refiere el artículo 79, inciso b), del Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República, Ley de Bancos y Grupos Financieros, así como la enajenación de bienes de bancos que se encuentren en proceso de liquidación judicial o extrajudicial. Para el efecto, se proponen reformas a los



Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

artículos 6 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 7 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; 11 de la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos; 1, 3 y 8 de la Ley del Impuesto sobre Productos Financieros; y, 4 de la Ley del Impuesto Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz

CONSIDERACIONES LEGALES:

Del análisis legal realizado por el cuerpo de asesores de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, se llegó a la conclusión que la iniciativa que dispone aprobar las Reformas Legales a Distintas Leyes Tributarias, no contraviene ninguna norma Constitucional y legal vigente, por lo que es procedente la aprobación de la misma por parte del Pleno del Congreso.

CONCLUSIÓN:

Por lo anteriormente considerado, se concluye que las Reformas Legales a Distintas Leyes Tributarias constituyen una acción positiva del Congreso de la República, la cual conlleva, entre otros, los beneficios siguientes:

- La estructura de empresa controladora en los grupos financieros permite una mejor regulación, fortalece la supervisión funcional de sus operaciones y optimiza los beneficios que implica la producción conjunta de servicios financieros, minimizando el riesgo de contagio.
- La compra-venta de cartera crediticia coadyuva a la mejor administración de los riesgos, ya que permite mitigarlos mediante la obtención de recursos ante necesidades temporales de liquidez o por insuficiencias patrimoniales.
- Un beneficio social al garantizar de mejor manera la recuperación de los recursos por parte de los fideicomisos constituidos con los activos de una entidad bancaria sometida a la suspensión de sus operaciones.

Consecuentemente, la Comisión de Economía y Comercio Exterior emite **DICTAMEN FAVORABLE** a la Iniciativa de Ley No. 3576, para que sea el Honorable Pleno del Congreso de la República, quien conozca y decida conforme el artículo 171, literal a), de la Constitución Política de la República de Guatemala, sobre la aprobación de las Reformas Legales a Distintas Leyes Tributarias.



Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Dado en la Sala de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, en la ciudad de Guatemala a los once días de Diciembre de dos mil seis.

Mariano Rayo Muñoz
PRESIDENTE

Carlos Alberto Guerrero Dumani
Vicepresidente

Víctor Leonel Ramírez Hernández

Carlos Augusto Valle Torres

Pablo Duarte Sáenz de Tejada

Julio Lowenthal Foncea

Pablo Monsanto

Manuel Antonio Baldizón Méndez

Jorge Luis Ortega Torres



Comisión de Economía y Comercio Exterior
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Mauricio Nohé León Corado

Efraín Asij Chile

Oliverio García Rodas

Marco Vinicio Cerezo Arévalo

Juan José Cabrera Alonso



DECRETO NÚMERO ____ - 2006

DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con los artículos 119 y 133 de la Constitución Política de la República de Guatemala, es obligación fundamental del Estado proteger la formación de capital, el ahorro y la inversión, así como crear las condiciones adecuadas para promover la inversión de capitales nacionales y extranjeros y, velar por la liquidez y solvencia del sistema bancario nacional, asegurando la estabilidad y el fortalecimiento del ahorro nacional, en éste último caso como un bien jurídico a ser tutelado por el Estado.

CONSIDERANDO:

Que, para coadyuvar, por una parte, al proceso de salida ordenada de una entidad bancaria nacional que se encuentre sometida a regularización, suspensión de operaciones y exclusión de activos y pasivos y, por otra, al fortalecimiento del proceso de modernización del sistema financiero nacional, se hace necesario incorporar a las leyes fiscales o tributarias del país, aquellas exenciones que permitan alcanzar los objetivos anteriormente relacionados.

CONSIDERNADO:

Que otra forma de fortalecer el sistema bancario nacional y, por consiguiente, el ahorro del país, es necesario ordenar los aspectos fiscales o tributarios a los actos a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, Decreto del Congreso de la República número 19-2002.

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala,

DECRETA

Las siguientes:

REFORMAS LEGALES A DISTINTAS LEYES TRIBUTARIAS

Artículo 1. Se adiciona la literal q) al artículo 6 del Decreto Número 26-92 del Congreso de la República, Ley del Impuesto sobre la Renta y sus reformas, el cual queda así:

“q) Las rentas que obtengan, para desarrollar sus fines, los fideicomisos que se constituyan de conformidad con la literal b) del artículo 79 del Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República, Ley de Bancos y Grupos Financieros.”

Artículo 2. Se reforman los numerales 4 y 14, y se adiciona el numeral 16 al artículo 7 del Decreto Número 27-92 del Congreso de la República, Ley del Impuesto al Valor Agregado y sus reformas, los cuales quedan así:

“4. Los servicios que presten las bolsas de valores autorizadas para operar en el país, así como los servicios que presten los bancos, las sociedades financieras, los almacenes generales de depósito, las casas de cambio y el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, cuya vigilancia e inspección corresponda a la Superintendencia de Bancos, y los servicios que presten los fideicomisos que se constituyan de conformidad con la literal b) del artículo 79 del Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República, Ley de Bancos y Grupos Financieros. En lo que respecta a la actividad aseguradora y afianzadora, están exentas exclusivamente las operaciones de reaseguro y de reafianzamiento.

14. La aceptación o adjudicación en pago, de bienes muebles o inmuebles, así como la enajenación de los bienes que realicen los fideicomisos constituidos al amparo de la literal b) del artículo 79 del Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República, Ley de Bancos y Grupos Financieros y la enajenación de los bienes de los bancos que se encuentren en proceso de liquidación judicial ó extrajudicial.

15. La compra-venta de activos crediticios a bancos y sociedades financieras, entre empresas que no formen parte del mismo grupo financiero. A las compras de activos crediticios no les será aplicable el segundo párrafo del Artículo 1444 del Código Civil.”

Artículo 3. Se reforman los numerales 16 y 20, y se adicionan los numerales 21 y 22, al artículo 11 del Decreto Número 37-92 del Congreso de la República, Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y del Papel Sellado Especial para Protocolos y reformas, los cuales quedan así:

- “16. Los créditos y préstamos otorgados por los bancos, sociedades financieras, aseguradoras, afianzadoras y almacenes generales de depósito, cuya vigilancia e inspección corresponda a la Superintendencia de Bancos, para cualquier destino, y los documentos acreditativos de los mismos.
- 20. La compra-venta de activos crediticios a bancos y sociedades financieras, entre empresas que no formen parte del mismo grupo financiero. A las compras de activos crediticios no les será aplicable el segundo párrafo del Artículo 1444 del Código Civil.
- 21. La constitución de fideicomisos al amparo de la literal b) del artículo 79 del Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República, Ley de Bancos y Grupos Financieros, así como la enajenación de los bienes que realicen dichos fideicomisos; la aceptación o adjudicación en pago, de bienes muebles o inmuebles a su favor; y, los actos y operaciones que efectúen dichos fideicomisos para desarrollar sus fines.
- 22. El pago de dividendos o utilidades que realicen las empresas controladoras a que se refiere el artículo 32 del Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República, ley de Bancos y Grupos Financieros.”

Artículo 4. Se reforma el artículo 1 del Decreto Número 26-95 del Congreso de la República, Ley del Impuesto sobre Productos Financieros y sus reformas, el cual queda así:

“Artículo 1. Del Impuesto. Se crea un impuesto específico que grava los ingresos por intereses de cualquier naturaleza, incluyendo los provenientes de títulos-valores, públicos o privados, que se paguen o acrediten en cuenta a personas individuales o jurídicas, domiciliadas en Guatemala.

Se exceptúan los pagos o acreditaciones en cuenta que se efectúen a bancos, sociedades financieras, aseguradoras, afianzadoras, almacenes generales de depósito, casas de cambio y al Instituto de

Fomento de Hipotecas Aseguradas, cuya vigilancia e inspección corresponda a la Superintendencia de Bancos y, atendiendo a su naturaleza y objeto, los fideicomisos que se constituyan al amparo de la literal b) del artículo 79 del Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República, ley de Bancos y Grupos Financieros.

Para los efectos de esta ley, los diferenciales entre el precio de compra y el valor a que se redimen los títulos valores, con cupón o tasa cero (0), se consideran intereses.”

Artículo 5. Se reforma el artículo 3 del Decreto Número 26-95 del Congreso de la República, Ley del Impuesto sobre Productos Financieros y sus reformas, el cual queda así:


Artículo 3. Del Sujeto Pasivo. Están obligados al pago del impuesto que establece esta ley, las personas individuales o jurídicas domiciliadas en el país, que obtengan ingresos por concepto de intereses a que se refiere el artículo 1 de la presente Ley.

Se exceptúan las entidades a que se hace referencia en el segundo párrafo del artículo 1 de la presente ley.”

Artículo 6. Se reforma el artículo 8 del Decreto Número 26-95 del Congreso de la República, Ley del Impuesto sobre Productos Financieros y sus reformas, el cual queda así:

“Artículo 8. De la Retención y del Plazo para Enterar el Impuesto. Las personas individuales o jurídicas que paguen o acrediten en cuenta intereses de cualquier naturaleza, incluyendo los provenientes de títulos valores, públicos o privados, a personas individuales o jurídicas, domiciliadas en Guatemala, retendrán el diez por ciento (10%) con carácter de pago definitivo del impuesto.

Cuando el pago o acreditación de intereses que grava la presente ley se efectúe a bancos, sociedades financieras, aseguradoras, afianzadoras, almacenes generales de depósito, casas de cambio y el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, cuya vigilancia e inspección corresponda a la Superintendencia de Bancos, y a los fideicomisos que se constituyan al amparo de la literal b) del artículo 79 del Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República, Ley de Bancos y Grupos Financieros, no procede aplicar la retención del impuesto y, por lo tanto, los intereses por ellas percibidos constituyen parte de su renta bruta para efectos del Impuesto sobre la Renta.



Cuando el pago o acreditación lo efectúen los bancos, sociedades financieras, aseguradoras, afianzadoras, almacenes generales de depósito, casas de cambio y el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, cuya vigilancia e inspección corresponde a la Superintendencia de bancos, las retenciones con carácter de pago definitivo del impuesto se aplicarán en forma global sobre la totalidad de los intereses pagados o acreditados a los ahorrantes, depositantes o inversionistas. En estos casos, la Superintendencia de Administración Tributaria no ejercerá un control individual sobre dichas cuentas.

Las retenciones efectuadas por el pago de este impuesto deberán enterarse a las cajas fiscales dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente al mes calendario en que se efectuaron las mismas. Para el efecto, la Superintendencia de Administración Tributaria proporcionará los formularios correspondientes.”

Artículo 7. Se adicionan las literales h) e i) al artículo 4 del Decreto Número 19-04 del Congreso de la República, Ley del Impuesto Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz, el cual queda así:

- “h) Las empresas controladoras referidas en el artículo 32 del Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República, Ley de Bancos y Grupos Financieros; e,
- i) Los fideicomisos constituidos al amparo de la literal b) del artículo 79 del Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República, Ley de Bancos y Grupos Financieros.”

Artículo 8. Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS _____ DIAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL SIETE.

